

C Columna

El reloj de la gratuidad y el desafío de la insularidad



Victor Saldivia Vera
Director docente de Ingeniería Civil en Informática, Universidad de Los Lagos, sede Chiloé

El inicio del gobierno de José Antonio Kast ha puesto sobre la mesa un debate que en Chiloé adquiere matices especiales: la eficiencia del gasto en educación superior. Al proponer limitaciones a la gratuidad bajo una lógica de austeridad fiscal, se instala una barrera que golpea con fuerza a las zonas extremas. Como director docente de Ingeniería Civil en Informática, veo con preocupación cómo estas medidas, diseñadas desde una visión centralista, ignoran las trayectorias de vida de los estudiantes chiloés.

La propuesta busca restringir la gratuidad universitaria a los mayores de 30 años. En Chiloé, el camino a la educación superior rara vez es lineal. Muchos jóvenes postergan sus

“¿Por qué un chilote que decide profesionalizarse a los 31 años en el área de análisis de datos o arquitectura de sistemas debe ser excluido del beneficio estatal?”

estudios para trabajar y costear el traslado desde islas interiores o la vida en Castro, o para nivelar brechas que el sistema escolar rural aún no cierra.

Imponer un “techo de edad” es castigar la resiliencia de quien decide volver a estudiar para transformar su realidad y la de su territorio. En las ciencias de la computación, esta restricción es particularmente dañina. La informática es hoy el motor de la descentralización; permite desarrollar software para el mundo desde el archipiélago.

Sin embargo, formar un ingeniero civil requiere una maduración técnica profunda. Si el Estado condiciona el financiamiento a plazos de caducidad rígidos, empuja a los estudiantes a una carrera contra el reloj que no admite el error ni

la experimentación, elementos básicos del aprendizaje en ingeniería.

Además, el Ejecutivo justifica esta medida señalando que la gratuidad se mantendrá para la educación técnica, bajo la premisa de que allí están quienes “salen a trabajar para mantener una familia”. Esta distinción crea una segmentación peligrosa: sugiere que el estudiante mayor de 30 años en zonas aisladas sólo debe aspirar a formaciones de ciclo corto, cerrándole la puerta a la alta especialización universitaria.

¿Por qué un chilote que decide profesionalizarse a los 31 años en el área de análisis de datos o arquitectura de sistemas debe ser excluido del beneficio estatal?

La eficiencia fiscal es un ob-

jetivo legítimo y necesario para la salud económica del país, pero el desafío de la nueva administración radica en que esta no se traduzca en una pérdida de capital intelectual para las regiones.

En Chiloé, la informática representa una oportunidad única para diversificar nuestra matriz productiva más allá de las industrias. Para alcanzar este potencial, es fundamental que las políticas de financiamiento reconozcan las trayectorias académicas diversas de nuestra zona.

Sólo con un sistema que integre la identidad territorial y la realidad de la insularidad, podremos asegurar que el presupuesto público impulse, y no postergue, el talento de quienes hoy buscan innovar desde el archipiélago. 